

29ª REUNION — 21ª SESION ORDINARIA — 4 DE AGOSTO DE 1949

Presidencia del doctor Héctor J. Cámpora

Secretarios: doctores Leonidas Zavalla Carbó y Rafael V. González

DIPUTADOS PRESENTES:

ALBRIEU, Oscar E.
ALVAREZ PEREYRA, Manuel
ALLUB, Rosendo
ARAOZ, Ricardo E.
ARGAÑA, José M.
ASTORGANO, José
ATALA, Luis
AYALA LÓPEZ TORRES, Francisco
BAGNASCO, Vicente
BALBIN, Ricardo
BENÍTEZ, Antonio J.
BERETTA, Eduardo
BERNARDEZ, Manuel
BIDEGAIN, Oscar R.
BONAZZOLA, Romeo E.
BONINO, Alberto C.
BRUGNEROTTO, Juan N. D.
BRUNO, Domingo
BUSTOS FIERRO, Raúl
BUTTERFIELD, Humberto
CÁMPORA, Héctor J.
CAMUS, E. P.
CANDIOTI, Alberto M.
CANÉ, José
CARRERAS, Ernesto A.
CASAS NOBLEGA, Armando
CATTÁNEO, Atilio E.
CLEVE, Ernesto
COLOM, Eduardo
CONTE GRAND, José Amadeo
COOKE, John William
CÓRDOVA, J. Salvador
CUFRÉ, Orlando H.
CURSACK, Roberto Enrique
DÁVILA, J. Aníbal
DECKER, Rodolfo A.
DEGREEF, Juan Ramón
DE LA TORRE, Juan
DEL CARRIL, Emilio Donato
DEL MAZO, Gabriel
DELLEPIANE, Luis
DE PRISCO, Guillermo
DÍAZ, Carlos A.
DÍAZ, Manuel M.
DÍAZ DE VIVAR, Joaquín
DRI, Roberto
ERRO, Saturnino S.
ESTRADA, Ángel C.
FAJRE, José Benito
FERNÁNDEZ, Hernán S.
FERRANDO, Manuel P.
FERRER, Modesto

FILIPPO, Virgilio M.
FORTEZA, Eduardo Julio
FREGOSI, Luis J.
FRONDIZI, Arturo
GARAGUSO, Bernardino Hipólito
GARAY, Marcelino S.
GARCIA, Manuel
GIL FLOOD, Mario
GONZALEZ FUNES, Tomás
GUARDO, Ricardo C.
HARAMBOURE, Horacio
IBARGUREN, Prudencio M.
ILLIA, Arturo U.
LAGRAÑA, Héctor D.
LAREO, Ricardo
LASCIAE, Guillermo F.
LAVIA, Ludovico
LELOIR, Alejandro H.
LEMA, Manuel E.
LETAMENDI, Balbino (h.)
LICEAGA, Félix J.
LÓPEZ SERROT, Oscar
LUCINI, Raúl Felipe
MAC KAY, Luis R.
MACHARGO, Alfredo F.
MAINERI, D. Jacinto
MALDONADO LARA, José María
MANTARAS, Manuel J.
MARIATEGUI, Ángel S.
MARINI, Ángel C.
MAROTTA, José
MARTÍNEZ GUERRERO, Guillermo
MARTÍNEZ LUQUE, Enrique
MERCADER, Emir E.
MESSINA, Humberto
MIEL ASQUÍA, Ángel J.
MONJARDIN, Federico F.
MONTES, Abel
MONTES, Juan Manuel
MONTIEL, Alcides E.
MORENO, José Luis
NORIEGA, Juan J.
NOVELLINO, Francisco
OSINALDE, Rafael
PALACIO, Ernesto
PARRY, Roberto
PASQUALI, Juan Domingo
PASQUINI, José P. D.
PASTOR, Reynaldo A.
PEREA, Pedro J.
PEREYRA, Luis Alberto
PÉREZ MARTÍN, José
PIEROTTI, Mario
PIRANI, Antonio S.

PONCE, Ángel L.
PONTIERI, Silverio
REYNÉS, Leandro R.
RICAGNO, Roberto
ROCHE, Luis Armando
RODRÍGUEZ, Manuel
RODRÍGUEZ, Nerio M.
RODRÍGUEZ DE LA TORRE, Raúl
ROJAS, Absalón
ROJAS, Nerio
ROSSI, José
ROUGGIER, Valerio S.
RUDI, Ricardo
RUMBO, Eduardo I.
SÁNCHEZ, Pedro
SAN MILLÁN, Ricardo Antonio
SANTANDER, Silvano
SAPORITI, Luis
SARAVIA, Teodoro S.
SARMIENTO, Manuel
SEEBER, Carlos Manuel
SILVESTRE, Adolfo J. B.
SOBRAL, Antonio
SOLÁ, Fernando
STINCO, Luis A.
TEJADA, Ramón Washington
TILLI, Pedro
TOMMASI, Victorio M.
TORO, Ricardo
TREBINO, Natalio
URANGA, Raúl L.
URTIAGA BILBAO, Mateo de
VALDEZ, Celestino
VANASCO, Julio A.
VELLOSO COLOMBRES, Manuel F.
VERGARA, Amando
VILLACORTA, Luis René
VILLAFANE, José María
VISCA, José Emilio
VISCHI, Albino
VITOLO, Alfredo R.
YADAROLA, Mauricio L.
ZAMUDIO, Juan Carlos
ZANONI, Pedro P.
ZAVALA ORTIZ, Miguel Ángel

AUSENTE, CON AVISO:

RABANAL, Francisco

AUSENTES, CON LICENCIA:

MONTES DE OCA, Carlos
OTTONELLO, Benito J.
REPETTO, Agustín
VAREA, Isidoro

SUMARIO

1.—Manifestaciones en minoría.

2.—Izamiento de la bandera nacional.

3.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, sobre delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

II.—Comunicaciones de comisión.

III.—Despachos de comisión.

IV.—Peticiones particulares.

V.—Proyecto de ley del señor diputado Alvarez Pereyra: pensión a la señora Carmen Pacheco de Ojea.

VI.—Proyecto de ley del señor diputado del Mazo y otros: creación del Instituto Agrotécnico Nacional en la provincia de Entre Ríos.

VII.—Proyecto de ley del señor diputado Reynés: subsidio al club colegial de la Escuela Superior de Comercio Nº 1 Joaquín V. González de la Capital Federal.

VIII.—Proyecto de ley del señor diputado Reynés: subsidio a la cátedra de Farmacodinamia de la Escuela de Farmacia y Bioquímica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, para adquisición de instrumental y elementos de experimentación.

IX.—Proyecto de ley del señor diputado Mariategui: pensión a la señorita Marta Robirosa.

X.—Proyecto de ley del señor diputado Reynés y otros: incorporación del ciudadano Vito Dumas a la Armada Nacional, con el grado de capitán de navío en situación de retiro.

XI.—Proyecto de ley del señor diputado Cufre: subsidio para obras, a la Biblioteca Popular Doctor Antonio Novaro, de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires.

XII.—Proyecto de ley del señor diputado Conte Grand: modificación del artículo 182 del Código Penal, sobre uso ilícito de las aguas públicas.

XIII.—Proyecto de ley de los señores diputados Sarmiento y Visca: contribución del Estado para el sostenimiento de establecimientos que impartan enseñanza gratuita.

XIV.—Proyecto de ley de los señores diputados Leloir y Sarmiento: creación de cargos y aumento de asignaciones para directores de cursos nocturnos en el Consejo Nacional de Educación, con destino a las Universidades Populares Argentinas.

XV.—Proyecto de ley del señor diputado del Mazo: creación de un ciclo básico del bachillerato y sección comercial anexa, dependiente del Ministerio de Educación, en Baradero, provincia de Buenos Aires.

XVI.—Proyecto de ley del señor diputado Tejada: edificio para Correos y Telecomunicaciones en el distrito de Rodeo, departamento Iglesia, provincia de San Juan.

XVII.—Proyecto de ley del señor diputado Tejada: subsidio para obras, a clubes de deportes del departamento Pocito, provincia de San Juan.

XVIII.—Proyecto de ley del señor diputado Tejada: subsidio a la Curia Eclesiástica de la provincia de San Juan para la construcción de un templo en el distrito Guanacache, departamento Sarmiento.

XIX.—Proyecto de ley del señor diputado Tejada: subsidio para obras, al Club Sportivo San Martín, del distrito Rodeo, departamento Iglesia, provincia de San Juan.

XX.—Proyecto de ley de los señores diputados Visca y Fregossi: pensión a la señora Blanca Amelia Duarte de Alvarez Rodríguez e hijos menores.

XXI.—Proyecto de declaración del señor diputado Cufre: expresión del deseo de que se pague el subsidio otorgado a la Sociedad Patronato de la Infancia, de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires.

XXII.—Proyecto de declaración de los señores diputados Novellino y Lagaña, sobre construcción de edificio para la oficina de Correos y Telecomunicaciones en Gualeguaychú, Entre Ríos.

XXIII.—Proyectos de resolución y de declaración en la mesa de la Honorable Cámara:

1.—Del señor diputado Sobral: pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre cumplimiento de la ley 419, de subvenciones a las bibliotecas populares del país.

2.—De los señores diputados Uranga y Santander: expresión del deseo de que se paguen subsidios otor-

gados a instituciones de asistencia social y cultura popular de la provincia de Entre Ríos.

- 4.—Concédese licencia para faltar a sesiones a los señores diputados Ottonello y Montes de Oca.
- 5.—Homenaje a la memoria del doctor Antonio Sargana.
- 6.—Renuncia del señor diputado Parry de los cargos de miembro de la Comisión de Territorios Nacionales y de miembro de la Comisión Especial Parlamentaria encargada de investigar denuncias de torturas.
- 7.—Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Zavala Ortiz con motivo de un comunicado dado a publicidad por la municipalidad de la Capital.
- 8.—Continúa la consideración del proyecto de resolución del señor diputado Pastor por el que se piden informes respecto al comercio de carnes.
- 9.—Moción del señor diputado Albrieu de preferencia para el proyecto de ley del señor diputado Cámpora y otros, por el que se acuerda un crédito a la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón.
- 10.—La Honorable Cámara estudia en comisión el proyecto de ley a que se refiere el número 9 de este sumario.
- 11.—Consideración del despacho, producido por la Honorable Cámara constituida en comisión, en el proyecto de ley a que se refieren los números 9 y 10 de este sumario. Se sanciona.
- 12.—Apéndice:

I.—Sanciones de la Honorable Cámara.

II.—Inserciones.

—En Buenos Aires, a los cuatro días del mes de agosto de 1949, a la hora 16:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Decker. — Señor presidente: como en la casa hay número, hago indicación de que se continúe llamando hasta que se consiga quórum.

Sr. Presidente (Cámpora). — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se seguirá llamando.

—A la hora 16 y 5:

2

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Cámpora). — Queda abierta la sesión con la presencia de 85 señores diputados.

Invito al señor diputado por el distrito electoral de Santa Fe don Ernesto A. Carreras, por corresponderle en la nómina alfabética —en ausencia del señor diputado por Buenos Aires don José Cané—, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

—Puestos de pie los señores diputados y los concurrentes a las galerías, el señor diputado don Ernesto A. Carreras iza la bandera nacional. (Aplausos.)

3

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Cámpora). — Por Secretaría se dará cuenta de los asuntos entrados.

I

Buenos Aires, 29 de julio de 1949.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad remitiendo el adjunto proyecto de ley sobre delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

Entre las innovaciones de más profundo sentido social que contiene la Constitución Nacional recientemente sancionada, merecen citarse las que consagran el derecho de la familia y el derecho de la ancianidad. Al definir a aquella como el núcleo primario y fundamental de la sociedad, establece que el primero de esos derechos será objeto de preferente protección por parte del Estado (artículo 37, apartado II). En cuanto al segundo, prescribe que todo anciano tiene derecho a la protección integral por cuenta y cargo de su familia, atribuyendo al Estado la potestad de demandar a los familiares remisos y solventes los aportes correspondientes (artículo 37, apartado III, párrafo 1).

La concepción políticosocial que inspira la reforma y la nobilísima finalidad perseguida, exigen que esos derechos sean vigorosamente tutelados en todos los ámbitos de la legislación. Incumbe, pues, al Poder Legislativo sancionar los preceptos legales necesarios para hacer efectivos los altos propósitos perseguidos por los constituyentes. No hay duda que la plena y total realización de dichos propósitos exigirá la sanción, en su debido tiempo, de un verdadero código o cuerpos legales especializados en estas importantes materias de la familia, la infancia y la ancianidad. Pero, sin perjuicio de ello, es también cierto que urge la pronta sanción de normas tendientes a repri-

mir penalmente los más graves atentados contra los bienes tutelados por la Constitución y que cada impide que lo sea desde ya. El derecho penal no puede permanecer por más tiempo en postura de indiferencia ante la tarea programada de consolidar la institución de la familia, núcleo elemental y primario, del que el hombre es criatura y en el cual ha de recibir insustituiblemente la formación sobre la que construirá todo el curso de su vida, según las palabras vertidas en la reciente Convención Nacional (Diario de Sesiones, página 275).

A ese propósito tiende, precisamente, este proyecto de ley complementaria del Código Penal que el Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a la consideración de vuestra honorabilidad, por el que se crea el delito de incumplimiento a los deberes de asistencia familiar, previendo sanciones de multa y privativas de libertad para aquellos que maliciosamente se substraen a las primordiales obligaciones debidas a los componentes del núcleo familiar. Con ello, el Poder Ejecutivo entiende que se fortificará con eficacia lo que constituye uno de los pilares de nuestra estructura social.

La incriminación propuesta no importa, por lo demás, una novedad en la legislación comparada más reciente.

Desde que Francia sancionó como delito el abandono de familia por ley del 4 de febrero de 1924, son varias las naciones que, de una u otra manera, siguieron su ejemplo. Así lo hicieron Holanda, Austria, Dinamarca, Inglaterra, España, Italia, Canadá, Noruega, Brasil, Letonia, Alemania, Portugal, Nueva Zelandia, Polonia, Checoslovaquia, Suiza, Estados de Illinois, Virginia, Massachusetts, Carolina, y fue motivo especial de preocupación en el Comité de Protección a la Infancia de la Sociedad de las Naciones (1926), en la V Comisión de la Asamblea de la Liga de las Naciones (1932) y en la IV Conferencia para la Unificación del Derecho Penal (Madrid, 1933). Tampoco entre nosotros se desconoce la conveniencia de reprimir el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, pues dicha incriminación ha sido prevista, en alguna medida, por los proyectos Coll-Gómez (1937) y Peco (1941) y ha sido propiciada por los camaristas del fuero penal doctor Antonio Luis Beruti (*Breve excursión por las lagunas del Código Penal*, en *Anales de la Sociedad Argentina de Criminología*, 1937) y Ernesto J. Ure (*La protección penal de la familia*, Buenos Aires, 1936).

Por otra parte, no es ésta, en nuestro medio, la primera tentativa de sancionar el abandono de los deberes asistenciales. Así, la ley 10.903, del año 1919, significó ya una reforma fundamental en punto a derechos que muchos concebían como absolutos, al definir a la patria potestad como a un conjunto no sólo de derechos sino también de obligaciones.

Claro está que no han faltado opiniones adversas a la incriminación propuesta, aunque reducidas en número e incapaces de oponerse al arrollador impulso con que los nuevos principios sociales y asistenciales se están haciendo presentes en todos los aspectos de nuestra legislación.

El presente proyecto ofrece un aspecto novedoso, en cuanto se aparta de los ordenamientos legislativos vigentes. En efecto, el texto que se somete a vuestra honorabilidad va más allá que la legislación francesa, pues ésta, aun después de las modificaciones sancionadas en 1942 con el objeto de ampliar las previsiones de la ley de 1924, no alcanza a tutelar mu-

chas situaciones que merecerían protección. En cambio, el proyecto no va tan lejos como el Código Penal italiano, que, al incluir en la incriminación situaciones de abandono puramente moral, permite una intervención del Estado en la intimidad del hogar doméstico que no condice con la sensibilidad y el estilo de vida argentinos.

En verdad, el proyecto adopta, podriase decir, una posición intermedia. Tiene en mira la protección del desamparado en cuanto miembro de la comunidad económica familiar, frente a quienes tienen deberes, fundados en elementales sentimientos de solidaridad, de atender a los medios para su subsistencia. Por «medios de subsistencia», se entiende en este proyecto el conjunto de los elementos vitales indispensables para subsistir materialmente —alimentos, vestido, habitación— y no a todos los demás deberes impuestos por la ley a los abuelos, padres, hijos, cónyuges, adoptantes, curadores y tutores. Se agrega a este elenco el «guardador», pese a que el Código civil no lo menciona entre los representantes legales de los incapaces, en razón de que no es posible desconocer su realidad en nuestro medio y a que la ley 10.903 lo mencionó y el Código Penal de 1922 le reconocía personería en las disposiciones relativas a los menores delincuentes y a la agravación de los delitos de violación, corrupción, estupro y abuso deshonesto. El concepto de guardador, ha dicho la Cámara del Crimen de la Capital Federal, debe entenderse referido nada más que a una potestad de hecho ejercida sobre el menor (Fallos, V, 267). La figura del «guardador», no es insólita. Por el contrario, es frecuente en aquellos casos, bastante numerosos por cierto, en que la ausencia del interés económico, hace innecesario acudir a la justicia para la designación de representante legal.

De más está poner en relieve que el delito previsto en el presente proyecto requiere, para su comisión, dolo por parte del sujeto activo. En otros términos, sólo caen dentro de las previsiones legales aquellos que, además de encontrarse económicamente capacitados para cumplir con sus deberes de asistencia, deciden adoptar una actitud esquiva o remisa con pleno conocimiento de las circunstancias. De ahí que los textos proyectados, para evitar toda confusión, no incriminan simplemente a los que «no prestaren», los medios de subsistencia, sino a los que se «substraen», a prestarlos. Y es claro que, para afirmar que alguien se ha substraído al cumplimiento de los deberes de asistencia familiar, no basta con que haya sido negligente en alguna oportunidad, sino que es menester la comisión significativa de hechos deliberadamente omisivos.

Advertirá vuestra honorabilidad que el proyecto no supedita el ejercicio de la acción al incumplimiento de una anterior sentencia que imponga la obligación de pasar alimentos a ciertos parientes. Tal requisito es teórico y prácticamente criticable, puesto que aquí se trata de un delito cuya objetividad jurídica es la familia, cuya protección se procura, y no el buen orden judicial o el respeto a los fallos de los jueces, bienes éstos tutelados en otras normas. Por otra parte el régimen de la condenación judicial previa suele hacer ilusorias o lamentablemente demoradas, en muchos casos, las prestaciones alimentarias. Un eminente jurista italiano, Ugo Aloisi, en una cáustica crítica al sistema francés, expresó que «no se puede decir a una desgraciada prole que tiene hambre: munios de una sentencia del juez civil, dejad que pase en autoridad de cosa juzgada, esperad

todavía que transcurran tres meses y luego acudirá recién al juez del crimen». («La protezione penale della famiglia», en Riv. di Dir. Penitenziario, 1934.)

Por otra parte, conviene tener presente que la prestación de «medios de subsistencia», cuyo incumplimiento se sanciona penalmente, no puede ser superpuesta o confundida con la obligación alimentaria civil. Mientras aquella prestación se cumple proveyendo a las necesidades vitales primarias, esta última se regula con un sentido más amplio, teniendo en cuenta la condición social y caudales del alimentado y del prestador de alimentos (Código Civil, artículo 372; Código de Procedimiento Civil, artículo 602, inciso 2º). La diferencia se advierte en forma patente si se piensa que quien no cumple debidamente con la obligación alimentaria civil puede todavía no estar incurso en el delito de cuya incriminación se trata. Es que la obligación de prestar los medios indispensables para subsistir, recién surge frente a un estado de real necesidad, de verdadera indigencia, extremo al que no es indispensable llegar para hacer civilmente exigibles los alimentos. Otra diferencia entre una y otra obligación se advierte si se piensa que el círculo de parientes alcanzados por la obligación impuesta por el Código Civil es mucho más amplio que el de los alcanzados por este proyecto, que no incrimina más que a los integrantes del núcleo central de la familia, y a los que asumen su lugar.

Desde otro punto de vista, los deberes de asistencia previstos en el presente proyecto revisten —según ya se ha señalado— un sentido económico, que permite considerar excluidos de esta represión penal los casos de abandono moral. De tal modo, la ley que ahora se proyecta se distancia netamente del régimen italiano, para el que —como ya se ha dicho— también son punibles esas situaciones. A juicio del Poder Ejecutivo, no es conveniente dilucidar ante los tribunales del crimen problemas reservados a la intimidad del hogar y que tienen suficiente solución en las normas del derecho privado. Las actuales valoraciones de la sociedad argentina rechazarían enérgicamente una incriminación que haría posible llevar a los estrados de la justicia en lo penal —como ha ocurrido en Italia— situaciones como la del esposo que se alejó del hogar conyugal sin dejar por ello de hacerse cargo de los gastos de los suyos, y hasta la del esposo que se negó a compartir el lecho conyugal.

Finalmente, advertirá vuestra honorabilidad que las normas proyectadas superan la deficiencia de las disposiciones del Código Civil en cuanto al alcance de las obligaciones del tutor y del curador, por lo que a los aspectos alimentarios y subsistenciales se refiere. Así, de acuerdo con la legislación vigente, el tutor no tendría —a diferencia de lo que ocurre con el padre (Código Civil, artículo 265)— obligación de proveer, de su peculio, los alimentos requeridos por su pupilo indigente, ya que su deber se limitaría a exigir esa prestación a los parientes y, en ausencia de éstos, a colocarlo (Código Civil, artículos 428 y 430). En verdad, esta manera de concebir las obligaciones legales de los tutores y curadores para con sus pupilos indigentes, así como la ya señalada ausencia de normas en el Código Civil acerca de los guardadores, constituyen una prueba más de la ausencia de sentido social de que adolece, en muchas de sus partes, nuestra ley civil. En efecto, parecería que sólo importara prever con prolijidad las situaciones que se plantean en círculos familiares pudientes, quedando relegados a un segundo plano, los pro-

blemas de los humildes. Huelga decir que este gobierno considera como un urgente imperativo la tarea de borrar estas diferencias, toda vez que, por una u otra razón, corresponda al legislador enfrentarse con ellas. En este sentido, la legislación proyectada, aunque destinada a ser incorporada al Código Penal, viene a aclarar suficientemente la situación reseñada más arriba, sin perjuicio de que esta reforma sea consolidada oportunamente, cuando se dé término por el gobierno a la ya iniciada tarea de revisar en todas sus partes al Código Civil.

En síntesis, cabe destacar que los textos proyectados no hacen sino traducir en normas jurídicas puntos de vista acerca de la institución familiar que son unánimes entre los argentinos y que han tenido expresa consagración en la carta constitucional que nos rige.

Con la sanción de este proyecto, vuestra honorabilidad habrá hecho un valioso aporte a la obra social de tan vastos alcances en que está empeñado el gobierno de la Nación con la colaboración necesaria de todos los órganos del Estado.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN PERÓN.
Belisario Gache Pirán.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Se impondrá prisión de un mes a dos años o multa de quinientos a dos mil pesos a los padres que, aun sin mediar sentencia civil, se substraieren a prestar los medios indispensables para la subsistencia a su hijo menor de dieciocho años, o de más, si estuviere impedido.

Art. 2º — En las mismas penas del artículo anterior incurrirán en caso de substraerse a prestar los medios indispensables para la subsistencia, aun sin mediar sentencia civil:

- a) El hijo, con respecto a los padres impedidos;
- b) El adoptante, con respecto al adoptado menor de dieciocho años, o de más, si estuviere impedido y el adoptado con respecto al adoptante impedido;
- c) El tutor, guardador o curador, con respecto al menor de dieciocho años, o de más, si estuviere impedido, o al incapaz que se hallare bajo su tutela, guarda o curatela;
- d) El cónyuge, con respecto al otro no separado legalmente por su culpa.

Art. 3º — La responsabilidad de cada una de las personas mencionadas en los dos artículos anteriores no quedará excluida por la circunstancia de existir otras también obligadas a prestar los medios indispensables para la subsistencia.

Art. 4º — Agrégase al artículo 73 del Código Penal el siguiente inciso:

5º Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando la víctima fuere el cónyuge.

Art. 5º — La presente ley se tendrá por incorporada al Código Penal.

Art. 6º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Belisario Gache Pirán.

—A la Comisión de Legislación Penal.